

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEE/RAP/017/2009-3

ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO
BLUMENKRON ESCOBAR

SECRETARIOS: XITLALI GÓMEZ TERÁN Y
OLIVE BAHENA VERÁSTEGUI

Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de mayo de dos mil nueve.

VISTOS los autos del expediente al rubro citado, para resolver el **recurso de apelación** promovido por el Licenciado Mauricio Arzamendi Gordero, en su carácter de representante propietario del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Estatal Electoral de Morelos, en contra de la resolución emitida el tres de mayo de dos mil nueve por el Consejo Estatal Electoral de dicho organismo; y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes

De la narración de las constancias que obran en autos del expediente de mérito, se deducen los siguientes antecedentes:

a) Registro de candidatos. El día quince de abril de dos mil nueve, el Partido Nueva Alianza presentó ante el Consejo Municipal de Tetecala, Morelos, solicitud de registro de los cargos a concejales de dicho ayuntamiento, entre los que se encontraba el referente al de presidente municipal propietario.

b) Aprobación del registro. Con fecha veintiuno de abril del presente año, en sesión extraordinaria, el Consejo Municipal Electoral de Tetecala, Morelos, aprobó el registro de candidatos a los cargos de concejales del ayuntamiento citado, entre los que se encontraba el referente al de presidente municipal propietario.

c) Solicitud de sustitución. Por escrito de fecha treinta de abril del año que transcurre, el representante del Partido Nueva Alianza solicitó al Consejo Estatal Electoral la sustitución de la candidatura al cargo de presidente municipal por el Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por incapacidad del candidato propietario al cargo antes referido.

d) Resolución del Consejo Estatal Electoral. Con fecha tres de mayo de la presente anualidad, la autoridad administrativa responsable resolvió lo conducente a la solicitud de sustitución de registro mencionada en el inciso que antecede, en los siguientes términos:

[...] este Consejo Estatal Electoral determina:

Primero.- Es competente para resolver lo conducente respecto a la solicitud de sustitución fuera de los plazos establecidos por el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, por causa de incapacidad del candidato propietario al cargo de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, ciudadano Jorge Luís Pérez Hernández, presentada por el partido político Nueva Alianza.

Segundo.- No aprobar la solicitud de sustitución fuera de los plazos establecidos por el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, por causa de incapacidad del candidato propietario al cargo de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, ciudadano Jorge Luís Pérez Hernández, presentada por el partido político Nueva Alianza; toda vez que no acredita el partido político de referencia que el candidato registrado se encuentre imposibilitado, temporal, permanentemente, total o parcialmente en forma contundente para realizar sus actividades habituales, tampoco que sufra una limitación, o alteración en la inteligencia, provocada por el padecimiento y en consecuencia a ello no pueda gobernarse por sí mismo o manifestar su voluntad por algún medio.

Tercero.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido Político Nueva Alianza, por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral

Así por unanimidad, lo resolvieron, los integrantes del Consejo Estatal Electoral [...]

II. Recurso de apelación

Inconforme con dicha resolución, el día seis del presente mes y año, el Licenciado Mauricio Arzamendi Gordero, en su carácter de representante legal ante el Consejo Estatal Electoral del Partido Nueva Alianza, presentó demanda de recurso de apelación, ante el señalado organismo administrativo responsable.

III. Trámite

En virtud de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 303 y 308 del código de la materia, el Consejo Estatal Electoral responsable, llevó a cabo la siguiente tramitación:

1. El siete de mayo de dos mil nueve, se ordenó la publicitación del recurso en estrados, por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de que se apersonaran los terceros interesados en el asunto.
2. Con fecha nueve de mayo del presente mes y año, se emitió la certificación de vencimiento del plazo de las cuarenta y ocho horas, a que se hizo mención en el punto anterior.
3. En fecha once de mayo del año en curso, fue presentado ante este órgano jurisdiccional, el informe circunstanciado y sus anexos, rendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos.

IV. Sustanciación

1. En fecha once del presente mes y año, la Secretaría General de este Tribunal emitió auto, mediante el cual radicó el recurso de mérito, le asignó número de expediente y ordenó la insaculación del mismo.
2. Con fecha trece del presente mes y año, fue llevada a cabo la diligencia de sorteo, resultando insaculada la ponencia número tres a cargo del Magistrado Fernando Blumenkron Escobar, a efecto de realizar la sustanciación y resolución del presente medio de impugnación.
3. El mismo día, la Secretaría General procedió a la remisión del expediente con sus anexos y demás actuaciones previas, a la ponencia que resultó insaculada, en los términos del punto que antecede.

4. Con fecha quince de mayo de la anualidad que transcurre, el Magistrado Ponente dictó auto de radicación, admisión y cierre de instrucción en virtud de no existir trámite alguno pendiente de realizar, quedando los autos en estado de dictar sentencia; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con el artículo 297 del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo, se concluye que en el medio de impugnación que se resuelve, se encuentran satisfechos los requisitos esenciales de procedibilidad del mismo, previstos en el artículo 305, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Morelos, ya que la demanda se presentó por escrito ante la autoridad administrativa responsable; se hizo constar el nombre del actor y su domicilio para recibir notificaciones; se acompañó el documento necesario para acreditar la personalidad del promovente; la mención expresa de la resolución que se impugna y de la autoridad administrativa responsable; mención de los agravios que causa la resolución impugnada; los preceptos presuntamente violados así como los hechos en que se basa la impugnación; se ofrecieron y aportaron dentro de los plazos de ley las pruebas, así como el nombre y firma autógrafa del promovente en el presente recurso.

Además, de las constancias que se tienen a la vista, se aprecia que se cumple con los requisitos siguientes:

a) Oportunidad. Los artículos 301, párrafo primero, y 304, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, disponen, en la parte que interesa, que: durante el

proceso electoral todos los días y horas serán hábiles; y que el recurso de apelación deberá interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquél que se tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o resolución que se impugne.

En la especie, el asunto que nos ocupa se presentó dentro del plazo antes referido, toda vez que, el acuerdo impugnado fue emitido el día tres de mayo del año en que se actúa, encontrándose presente en la sesión respectiva el representante del partido político promovente por lo que se trata de una notificación automática, en términos del artículo 330 del código electoral local y de la jurisprudencia número **S3ELJ 19/2001**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la páginas 194 y 195, de la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes*, cuyo rubro es **NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ**. Entonces, el término de los cuatro días de ley comenzó a contabilizarse a partir del día siguiente a la fecha en que se llevó a cabo la sesión de referencia, es decir, el cuatro de mayo de la anualidad que transcurre, presentándose el escrito inicial de demanda el siguiente seis del mismo mes y año, lo cual se corrobora con el sello fechador visible en la parte superior derecha de la primera página del escrito de demanda. En consecuencia, se encuentra presentado oportunamente en términos de ley.

b) Legitimación y Personería. De conformidad con lo previsto en los artículos 299, párrafo primero, y 300, fracción I, del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se satisface este requisito toda vez que el promovente es un partido político nacional y acude ante este órgano jurisdiccional, haciendo valer presuntas violaciones a su esfera jurídica por conducto de su representante legalmente acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en términos del

informe circunstanciado que corre agregado al expediente en que se actúa, lo cual se corrobora con la constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Morelos que obra a fojas 14 del sumario.

c) Definitividad. El promovente impugna el acuerdo de improcedencia de sustitución de registro por incapacidad del candidato, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, el día tres de mayo de dos mil nueve, y toda vez que, de conformidad con el calendario aprobado por la autoridad administrativa (visible en la página oficial de internet: www.ieemorelos.org.mx), el periodo de campañas electorales comenzó a partir de la fecha señalada y culminará el primero de julio del año en que se actúa, suscitándose dichos actos en la etapa de preparación de la elección, en consecuencia, resulta material y formalmente posible restituir al partido recurrente en los derechos que alega violados. Sirve de orientación al criterio anterior, la tesis número **S3EL 085/2001**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 876 y 877 de la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes*, cuyo rubro es: **REGISTRO DE CANDIDATOS. MOMENTO EN QUE ADQUIERE DEFINITIVIDAD (Legislación de Chihuahua)**. En la cual se indica que el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, consiste en que los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales competentes, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes de los mismos.

Aunado a lo anterior, con base en el artículo 295, fracción II, inciso b), del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de

Morelos, en el caso que nos ocupa, el recurso de apelación es el medio de impugnación que existe en dicho dispositivo legal para combatir las resoluciones o actos emitidos por el Consejo Estatal Electoral de Morelos, por lo que, es procedente afirmar que en el sistema de normas electorales de esta entidad federativa es la única vía para impugnar el acuerdo combatido.

Ahora bien, en el asunto que se resuelve no se hacen valer causales de improcedencia a petición de parte, ni este Tribunal advierte motivo alguno que actualice cualquiera de los supuestos de desechamiento referidos en el artículo 335 del código comicial local, ni tampoco se actualiza causal de sobreseimiento de conformidad con el artículo 336 de dicha normatividad.

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de procedibilidad.

TERCERO. *Autoridad responsable.* El Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, al ser emisor del acuerdo de fecha tres de mayo del año en curso, es por ende la autoridad responsable, en términos del artículo 298, fracción II, del código de la materia.

CUARTO. *Identificación del acto impugnado.* El partido actor, en su escrito inicial de demanda, manifiesta que promueve el presente recurso en contra de la resolución dictada por el Consejo Estatal Electoral el día tres de mayo del año en curso.

En tal sentido, de las constancias que obran en autos, y como quedó narrado en párrafos anteriores, el día tres de mayo de la presente anualidad, el representante legal del partido político actor tuvo conocimiento del acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral, en el cual se resolvió improcedente su solicitud de sustitución por incapacidad del candidato propietario al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos,

por el mismo instituto político, misma que fuera formulada en fecha treinta de abril del año que transcurre.

Por tanto, el acuerdo precisado debe considerarse como el acto impugnado y la materia de análisis en la presente sentencia, en razón de declarar improcedente la solicitud de sustitución de registro por incapacidad.

Cabe señalar, que de un análisis integral del escrito inicial de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que el actor, en términos generales, se duele, por una parte, de la inexacta aplicación de la normatividad aplicable y de los excesos en cuanto a las facultades y atribuciones de la autoridad administrativa, lo cual, a juicio de este resolutor se traduce en el incumplimiento a los principios de legalidad y certeza, rectores de la función electoral; de igual forma, se observa que otro de los motivos de disenso del partido impetrante es la indebida valoración del material probatorio aportado para acreditar la incapacidad hecha valer ante la ahora responsable, pues, según su dicho, el Consejo Estatal Electoral no valoró las pruebas conforme a los principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia al desestimar su valor y alcance probatorio.

En tales circunstancias, deberá estudiarse el asunto sometido a la consideración de esta jurisdicción a efecto de determinar si el organismo electoral responsable, en su acuerdo, respetó, por un lado, los principios de legalidad y certeza, así como el correcto análisis y valoración de las pruebas aportadas por el partido político ahora recurrente. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia número **S3ELJ 04/99** emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede consultarse en las páginas 182 y 183 de la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes*, intitulada: **MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA**

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.

QUINTO. Estudio de fondo. Del análisis de la demanda, este órgano jurisdiccional advierte que la **pretensión** del partido actor consiste en revocar el acuerdo impugnado a efecto de que se proceda a la sustitución del candidato por causa de incapacidad.

En tal virtud, la **causa de pedir** del promovente se sustenta en el hecho de que el Consejo Estatal Electoral, al analizar la cuestión planteada por el partido recurrente sobre la sustitución por incapacidad de su candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, realizó una incorrecta e inexacta interpretación de lo previsto por la normatividad aplicable al caso, así como la falta de valoración del material probatorio aportado.

Así, la **litis** del presente asunto se constriñe a establecer si la autoridad actuó apegada a los principios de legalidad y certeza, de igual forma, si valoró o no el material probatorio ofrecido y aportado por el partido recurrente atendiendo a la lógica, la sana crítica y la experiencia.

Luego, en la especie, se determinará si el acuerdo impugnado debe o no revocarse por este Tribunal y, de ser el caso, si es procedente o no la sustitución por incapacidad.

En ese sentido, en el acuerdo impugnado, en lo que interesa, se señaló lo siguiente:

[...] **Primero.-** Dispone el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, textualmente lo siguiente: **“Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:**

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;...”.

Determina el segundo párrafo, base I, primero y segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que: “ ... **La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: ...Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.**

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. ...”

El artículo 116 en su fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: **“El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.**

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) **Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; ...”**

Asimismo, el párrafo primero del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala que: **“Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las bases que establece la presente Constitución y las leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo y equidad de género.”.**

Por su parte la fracción I en su primer párrafo del artículo 23 de nuestra Constitución Local dispone: **“Los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. ...”**

De igual forma, la fracción III del citado precepto constitucional determina que: **“La organización, dirección y vigilancia de las elecciones en el Estado y los procesos plebiscitarios y de referéndum, estarán a cargo de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, autoridad en la materia, en cuya integración**

participan el poder legislativo del estado, los partidos políticos y los ciudadanos. Tendrá carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio propios, así como las facultades que le señale la presente Constitución y la ley...”.

Por su parte el artículo 112 en sus párrafos del primero al sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley determine, debiendo ser para cada Municipio proporcional al número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores.

El Presidente Municipal y el Síndico serán, electos conforme el principio de mayoría relativa; y los Regidores serán electos por el principio de representación proporcional.

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un suplente.

Los Partidos Políticos para participar en la integración del Ayuntamiento, deberán postular planilla de candidatos a Presidente y Síndico, así como la lista de Regidores en número igual al previsto para ese municipio en la Ley respectiva.

Para la asignación de Regidores se estará el principio de cociente natural y resto mayor, de conformidad como lo establezca la ley electoral.

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. ...”

A su vez, el artículo 91 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que: **“ El Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como depositario de la autoridad electoral es responsable de organizar las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana.**

Se regirá por las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Morelos y las de este código, bajo los principios electorales de: Constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad de género.”.

Aunado a lo anterior, el artículo 95 de la legislación electoral antes citada, señala que: **“El Consejo Estatal Electoral es el órgano superior de deliberación y dirección. Responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; ...”.**

Por su parte, el artículo 106 fracciones I, XXVII y XLI del Código Electoral de referencia, determinan como atribuciones de este órgano colegiado: **“Llevar acabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de participación ciudadana, previstos en la Constitución del Estado, cuidando el adecuado funcionamiento de los organismos electorales;...”, “resolver sobre sustitución de candidatos, conforme a lo dispuesto por este código;...”, así como “Dictar todas las**

resoluciones que sean necesarias para ser efectivas las disposiciones de este ordenamiento en el ámbito de su competencia;...”.

Tomando como fundamento las disposiciones legales y reglamentarias de referencia, este Consejo Estatal Electoral es competente para resolver lo conducente respecto a la solicitud de sustitución del candidato propietario al cargo de Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por el partido político Nueva Alianza, para contender en el proceso electoral ordinario local que tiene verificativo en la Entidad.

Segundo.- Establece el párrafo segundo del artículo 207 del Código de la materia que: **“El registro de candidatos a los cargos de Diputados y ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente del 8 al 15 de abril del año de la elección. El consejo correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la procedencia del registro.”.**

Asimismo, el artículo 212 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala que: **“Dentro de los plazos establecidos por este código los partidos políticos podrán libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrado. Concluidos aquéllos, solo por acuerdo podrá hacerse sustitución de candidatos por causa de muerte, inhabilitación o incapacidad. Los partidos políticos podrán solicitar ante el Consejo Estatal Electoral, fuera de los casos previstos, la cancelación del registro de uno o varios de sus candidatos”.**

De igual forma, el artículo 41 del Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular determina que: **“Dentro de los plazos establecidos en el artículo 207 del Código, los partidos podrán libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrado. Concluidos aquellos, solo por acuerdo del Consejo Estatal Electoral, podrá hacerse sustitución de candidatos por causa de muerte, inhabilitación o incapacidad.”**

[...]

es dable señalar que el plazo para el registro de candidatos dispuesto en el segundo párrafo del artículo 207 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, transcurrió del día 8 al día 15 del mes de abril del año en curso, y que el plazo para resolver sobre las solicitudes de registro de referencia, transcurrió del día 16 al 23 de abril de la presente anualidad, razón por la cual este órgano comicial se encuentra facultado para resolver lo conducente respecto a la solicitud de sustitución fuera de los plazos establecidos en el Código de la materia, por causa de incapacidad, del registro del ciudadano Profesor Jorge Luís Pérez Hernández, candidato propietario a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, del partido político Nueva Alianza, proponiendo el registro ahora como candidato del partido político de referencia al ciudadano Julio David Solano Gutiérrez, para contender en el proceso electoral ordinario que tiene verificativo en la Entidad.

Por tal motivo el contenido del artículo 212 del Código de la materia prevé los casos en que procede la sustitución de candidatos, y una vez ha concluido el período en que los partidos políticos pueden sustituir a los candidatos procede la sustitución de candidatos, exclusivamente, por fallecimiento, inhabilitación o incapacidad, estos casos sin duda constituyen situaciones extraordinarias, que una vez acontecidas concluido el registro de candidatos, genera la necesidad del partido político respectivo de llevar a cabo una sustitución.

En este orden de ideas, el partido político Nueva Alianza procedió a solicitar al Consejo Estatal Electoral, por conducto del Consejero Presidente, la sustitución del candidato de referencia, aduciendo la existencia de incapacidad por parte del candidato propietario a Presidente Municipal de Tetecala, ciudadano Jorge Luís Pérez Hernández, por tal motivo este órgano colegiado, del análisis

realizado al escrito presentado ante este organismo electoral con fecha 30 de abril del año que transcurre, signado por el Licenciado Mauricio Arzamendi Gordero, en su carácter de Representante ante el Consejo Estatal Electoral del partido político Nueva Alianza, así como de las documentales descritas en el resultando sexto de la presente resolución, se advierte que el Partido Político Nueva Alianza para acreditar la sustitución del candidato propietario a la Presidencia Municipal de Tetecala, Morelos, ciudadano Profesor Jorge Luís Pérez Hernández, por el ciudadano Julio David Solano Gutiérrez, para contender en el proceso electoral ordinario que tiene verificativo en la Entidad, exhibe únicamente dos constancias médicas mismas a las que se ha hecho referencia en el referido resultando sexto de esta resolución, con las cuales se pretende acreditar la incapacidad del candidato antes referido.

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el término "incapacidad" debe entenderse en su acepción legal, es decir, en lo que el ordenamiento correspondiente prevé al respecto, que en el caso lo es Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en cuanto a la "incapacidad" el artículo 6 del ordenamiento legal antes referido dispone que: ***"Tienen incapacidad natural y legal: I.- Los menores de edad; II.- Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquéllos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio; y III.- Las demás personas que señala la Ley."***

El concepto contenido en el precepto que antecede es el que debe entenderse la incapacidad a que se refiere el artículo 212 del Código Electoral del Estado, toda vez que es claro que la razón extraordinaria por la que un candidato registrado no pudiera cumplir el cometido para el que fué postulado, es la de no gozar de capacidad legal, la cual se define como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y para ejercerlos por sí mismo, siendo en este orden de ideas, que la incapacidad prevista en la ley civil, radica en la carencia o pérdida de la aptitud de la persona de autogobernarse libre y responsablemente, de tal suerte que no le sea dable obligarse por sí misma o manifestar su voluntad por algún medio.

Conforme a lo anterior, es posible deducir que no todos los casos de enfermedad o afecciones de carácter físico generan un estado de incapacidad, sino sólo aquellas que pudieran tener como consecuencia la falta o la limitación del autogobierno individual libre y responsable; independientemente de su calidad temporal, permanente, total o parcial; por tal motivo este Consejo Estatal Electoral, arriba a la conclusión que las constancias médicas que exhibe el Partido Político Nueva Alianza, mismas de las que se hace referencia en el resultando sexto de la presente resolución, y con las que se pretende acreditar que el Profesor Jorge Luís Pérez Hernández, padece una enfermedad que le genere incapacidad, tratando con esto de obtener la sustitución de la candidatura respectiva, constancias médicas que no generan convicción alguna para este cuerpo colegiado para proceder a la aprobación de la sustitución solicitada, toda vez que además de las constancias referidas, no se aportaron otros medios de convicción que en su conjunto puedan acreditar que el candidato multicitado padezca una incapacidad para ejercer la candidatura por el partido político que lo postula, toda vez que con las referidas constancias no se demuestra

la incapacidad prevista en el artículo 212 del Código de la materia, debido a que los documentos en cuestión, no mencionan las particularidades y alcances de los padecimientos que en ellas se señalan, ya que no indican que el paciente sufra una limitación, o alteración en la inteligencia, provocada por el padecimiento y no pueda gobernarse por sí mismo, o manifestar su voluntad por algún medio.

Robustece lo antes referido las siguientes tesis de jurisprudencia: [...]

En virtud de lo antes expuesto, este órgano colegiado determina no aprobar la solicitud de sustitución del candidato registrado por el Partido Político Nueva Alianza, ciudadano Jorge Luís Pérez Hernández, al cargo de Presidente Municipal Propietario, para el Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por causa de incapacidad; toda vez que el partido político en comento no acredita que el candidato del cual se solicitó su sustitución se encuentre imposibilitado temporal, permanentemente, total o parcialmente, para desempeñar en forma contundente sus actividades habituales, tampoco que sufra una limitación, o alteración en la inteligencia, provocada por el padecimiento y en consecuencia a ello no pueda gobernarse por sí mismo o manifestar su voluntad por algún medio, por tal motivo el registro de candidatos a Presidente y Síndico propietarios y suplentes, así como candidatos a Regidores, propietarios y suplentes, integrantes de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Tetecala, por el partido político Nueva Alianza, queda en los mismos términos que el registro aprobado por el Consejo Municipal Electoral de Tetecala, Morelos, con fecha veintiuno de abril del año en curso [...]

Ahora bien, con base en los criterios sostenidos en las jurisprudencias número **S3ELJ 02/98** y **S3ELJ 03/2000**, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intituladas respectivamente: **AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL** y **AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR**, de un análisis integral del escrito de demanda, este órgano resolutor advierte que los agravios expresados por el recurrente son, en síntesis, los siguientes:

a) Omisión en la aplicación de los artículos 106 y 339 del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

b) Inexacta aplicación de los artículos 23, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 106, fracciones I, XXVII y XLI, 212 y 214, fracción I, del Código Electoral local; 41 del Reglamento para el registro de candidatos a

cargos de elección popular emitido por el Instituto Estatal Electoral de Morelos; 6° del Código Familiar para el Estado de Morelos; así como de la tesis denominada “SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL SUPUESTO DE INCAPACIDAD (LEGISLACIÓN DE OAXACA Y SIMILARES).

c) Inexacta interpretación del artículo 212 del citado código comicial local.

Manifestando el recurrente, en vía de agravio, que la autoridad responsable al resolver incurrió en las siguientes irregularidades:

1. Actuó con excesos en lo que corresponde a las facultades y atribuciones que le confiere el Código Electoral para el Estado de Morelos.

2. Emitió un dictamen de medicina, cuando sus conocimientos en dicha materia son nulos.

3. Violó los principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia al valorar las constancias médicas que el partido exhibió para acreditar la incapacidad planteada, al considerar que las mismas resultaban improcedentes e insuficientes para demostrarla.

4. Debió dar un alcance interpretativo al concepto “incapacidad” desde el punto de vista laboral, y no como indebidamente lo hizo desde el punto de vista de la materia civil.

Establecida la *litis* en el caso que nos ocupa, este Tribunal considera procedente realizar el análisis de fondo con base en el siguiente marco normativo.

El artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala lo siguiente:

ARTÍCULO 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán

conforme a las bases que establece la presente Constitución y las leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, y equidad de género.

De lo anterior, tenemos que la función electoral se rige bajo los siguientes principios rectores: *certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, constitucionalidad, equidad, definitividad, profesionalismo y equidad de género.*

Por lo que respecta al principio de legalidad, el especialista en la materia José de Jesús Orozco Henríquez, en su artículo intitulado *Consideraciones sobre los principios y valores tutelados por el Derecho Electoral Federal mexicano* (revista Justicia Electoral, No. 9, México, 1997, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 102 y 103) lo define de la siguiente forma:

[...] El **principio de legalidad** electoral establece que **todo acto** de las autoridades electorales, es decir, los diversos órganos del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [...] en realidad, también los de las autoridades electorales locales [...] **debe encontrarse fundado y motivado** en el derecho en vigor.

En consecuencia, el principio de legalidad electoral postula la sujeción de todos los órganos electorales al Derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento electoral llevado a cabo por los órganos o autoridades electorales debe tener su apoyo estricto en una norma legal (en sentido material) [...]

En efecto, la existencia y sujeción a las normas jurídicas, en cuya elaboración hayan participado directa o indirectamente los miembros de una comunidad, es una de las características básicas de todo Estado democrático de Derecho [...]

El énfasis es nuestro.

En cuanto al de certeza, el mismo doctrinario en cita señala que dicho principio exige que:

[...] los respectivos actos y procedimientos electorales se basen en el conocimiento seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o interés de los integrantes de los órganos electorales, reduciendo al mínimo la posibilidad de error y desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o en su caso ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que aquéllos adquieran el

carácter de auténticos, atendiendo a las peculiaridades, requisitos o circunstancias que en los mismos concurren. La exigencia de reglas claras y que los actos de las autoridades y de los protagonistas electorales sean previsibles, en la medida que respeten y se sujeten a aquéllas, es una característica fundamental de un régimen democrático.

[...] los actos y procedimientos electorales deben ser veraces, reales y ajustados a los hechos (no sólo a las normas jurídicas). De ahí que se requiera dotar también a los actos y procedimientos electorales de transparencia, sin ocultamientos, lo cual reclama no sólo la publicidad de las sesiones de todos los órganos colegiados electorales [...] sino el deber de informar veraz, íntegra, clara y permanentemente a la ciudadanía y los partidos políticos sobre las consideraciones jurídicas y los elementos fácticos que fundan y motivan los diversos actos y resoluciones electorales [...] En resumen, se requiere de una ética del respeto al valor de la verdad, como elemento indispensable para conseguir que tales actos y procedimientos, incluyendo los resultados electorales, sean fidedignos, confiables y aceptados por la comunidad.

Ahora bien, por cuanto a la hipótesis de sustitución por incapacidad, el código local de la materia señala, en esencia, lo siguiente:

ARTÍCULO 212.- Dentro de los plazos establecidos por este código, **los partidos políticos podrán libremente sustituir** a los candidatos que hubiesen registrado. **Concluidos aquéllos, sólo por acuerdo** podrá hacerse sustitución de candidatos **por causa de muerte, inhabilitación o incapacidad** [...]

El énfasis es nuestro.

Por su parte, el Reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular (consultable en la página oficial de internet del Instituto Estatal Electoral de Morelos: www.iee.org.mx), al respecto indica:

ARTÍCULO 39.- Dentro de los plazos establecidos en el artículo 207 del Código, los partidos políticos podrán libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrado. **Concluidos aquéllos, sólo por acuerdo del Consejo Estatal Electoral, podrá hacerse sustitución de candidatos por causa de muerte, inhabilitación o incapacidad.**

El énfasis es nuestro.

La interpretación gramatical de estos preceptos nos lleva a considerar que el legislador estatal, dentro del supuesto de sustitución de candidatos, previó a su vez dos hipótesis,

consistentes en la solicitud de sustitución ordinaria y la solicitud de sustitución extraordinaria.

Esto es, en el caso de la primera, es decir, la sustitución ordinaria, consiste en una sustitución que los partidos políticos pueden realizar libremente, entendido el término *libertad*, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, como la *falta de sujeción y subordinación*.

Por lo que respecta a la segunda —la sustitución extraordinaria— se considera como tal porque la misma procede por causas excepcionales, consistentes en muerte, inhabilitación o incapacidad del candidato, lo que obliga a los partidos políticos a acudir ante la autoridad administrativa electoral a plantear alguna de estas anomalías a efecto de evitar quedar fuera de la contienda electoral, pudiéndose evitar esto al sustituir al candidato.

Como se advierte, esta última hipótesis de sustitución constriñe a los partidos políticos a acudir ante la autoridad administrativa electoral a plantear la causa por la que solicitan que su candidato sea sustituido. Pero además, les impone el *onus probandi*, es decir, la carga de la prueba, de acreditar con elementos idóneos y de suficiente fuerza convictiva, la existencia de dicha causa de sustitución, ello en la lógica del principio procesal: *el que afirma está obligado a probar*.

Lo anterior es así, toda vez que se trata de casos que implican situaciones extraordinarias, mismas que generan una necesidad en los partidos de sustituir a sus candidatos, puesto que la voluntad de los institutos políticos de postular a ciertos ciudadanos a los cargos de elección popular, es incuestionable que ya había sido manifestada al registrarlos dentro de los plazos legales, acreditando que los mismos cumplían con los requisitos de elegibilidad (lo que se traduce en la posibilidad de ejercer el

cargo) y al sobrevenir alguna circunstancia como muerte, inhabilitación o incapacidad de los candidatos postulados, evidentemente genera la obligación de que el partido demuestre que realmente existe la causa extraordinaria por la cual, su candidato registrado, no puede contender en campaña electoral y, de ser electo, ejercer el cargo.

Lo anterior, encuentra lógica, en el sentido de que el legislador, al establecer las causas extraordinarias por las cuales procede la sustitución fuera de los plazos previstos por la ley para el procedimiento de registro de candidatos en la entidad, lo que en el fondo fija es una especie de *candado*, por así decirlo, para evitar arbitrariedades en el desarrollo de la etapa de preparación del proceso electoral, mismas que trascenderían a la de resultados; además, también lo hace en cumplimiento al principio de definitividad de los actos en la materia, toda vez que no se puede estar en todo tiempo a la libre voluntad de los actores que participen en los comicios, como es el caso de los partidos políticos.

Para llegar a la consideración que antecede, este Tribunal parte de la premisa de que, en términos del artículo 188, párrafo segundo, del código de la materia, en el proceso electoral existen tres etapas bien definidas, consistentes en preparación de la elección, jornada electoral y resultados, operando en cada una de ellas el principio de definitividad, es decir, que los actos llevados a cabo con relación a las mismas, una vez concluidos, adquieren firmeza, por lo que, en principio, no es procedente realizarlos de nuevo, sino sólo en casos excepcionales, por ejemplo, el recuento de votos en sede jurisdiccional cuando no fue realizado en sede administrativa, o en el caso que nos ocupa: la sustitución de candidatos fuera del plazo de presentación de solicitudes de registro.

Así, el artículo 212 del código comicial local y el 39 del aludido reglamento, obligan a que sólo por acuerdo del Consejo Estatal Electoral podrá llevarse a cabo la sustitución de candidatos, lo cual, se entiende, será única y exclusivamente en los casos de muerte, inhabilitación e incapacidad del candidato, delimitándose con ello ciertamente la actuación de los institutos políticos, pues los mismos tuvieron su momento para ejercer, con libertad, el derecho de sustitución de sus candidatos.

Ahora bien, la normativa aplicable únicamente obliga a la autoridad administrativa electoral a resolver las solicitudes de sustitución *sólo por acuerdo*, sin que para ello señale algún procedimiento o formalidad a seguir al efecto de determinar procedente o no la solicitud de sustitución extraordinaria de referencia, por lo que, la autoridad administrativa, solamente se encuentra obligada a respetar los referidos principios rectores de la materia electoral, para el caso los de certeza y legalidad, así como analizar el asunto de conformidad con los parámetros dados por el derecho procesal, como por ejemplo, el valorar los elementos de prueba.

Por otra parte, como en el caso se plantea la sustitución por incapacidad, es menester determinar qué se entiende por dicho término toda vez que el legislador local fue omiso al establecer una definición de este concepto, contemplado en el artículo 212 del código comicial.

Pues bien, de conformidad con el doctrinario Ernesto Gutiérrez y González, capacidad es *la aptitud jurídica para ser sujeto de deberes y derechos, y hacerlos valer* (Gutiérrez y González, Ernesto, *Derecho de las obligaciones*, décima quinta edición, Porrúa, México, 2003, p. 445).

Por su parte, el ya citado Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, sobre el significado de incapacidad, señala que ésta es *la carencia de aptitud legal para ejecutar*

válidamente determinados actos, o para ejercer determinados cargos públicos.

Como se advierte, la *incapacidad de derecho* adquiere especial importancia para el asunto de mérito, toda vez que la misma, de conformidad con la definición citada, es la carencia de aptitud legal para ejercer válidamente determinados cargos públicos que implican tareas derivadas del compromiso ante la sociedad, o si se quiere, ante la ciudadanía (como es el caso de los de elección popular).

Funciones entre las que podemos encontrar, por ejemplo, la de toma de decisiones sobre programas de interés social o de hacer frente a contingencias, por lo que quien las desempeñe deberá tener aptitud legal, es decir, contar con condiciones de ser sujeto de derechos y obligaciones para el ejercicio de su encomienda. Para reforzar esta afirmación es válido traer a cita otro ejemplo: un gobernador o un presidente municipal puede sufrir una enfermedad como la diabetes, misma que, como hecho público y notorio, esto es, sin ser expertos en medicina, podemos decir que no le impediría al funcionario desempeñar adecuadamente sus tareas, puesto que la enfermedad es controlable y puede sobrellevarla amén de su cargo, caso contrario sería que el servidor público estuviera perturbado de sus facultades mentales, por así decirlo, puesto que en ese caso sería imposible ejercer su actividad, al encontrarse impedido para la toma de decisiones.

Sirve de sustento a lo anterior, *mutatis mutandi*, cambiando lo que se tenga que cambiar, el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido en la tesis relevante número **S3EL 021/2005**, visible en las páginas 943 y 944 de la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes*, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL SUPUESTO DE INCAPACIDAD (Legislación de Oaxaca y similares).—De la

interpretación del artículo 142, inciso b) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca en relación con el artículo 465 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, el término *incapacidad*, para efectos de la sustitución en el registro de candidatos, debe aplicarse el correspondiente al campo del derecho civil, es decir, la incapacidad legal se actualiza cuando alguna persona se encuentra perturbada en su inteligencia, aunque tenga intervalos lúcidos, o padezca alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación o la alteración en la inteligencia que esto le provoque, no pueda gobernarse y obligarse por sí misma o manifestar su voluntad por algún medio. Dicho de otra manera, no todos los casos de enfermedad o afectaciones de carácter físico generan un estado de incapacidad, sino sólo aquellas que puedan tener como consecuencia la falta o limitación del autogobierno individual, libre y responsable, independientemente de su calidad temporal, permanente, total o parcial, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son hechos notorios, que existan enfermedades crónicas o permanentes como la diabetes o la hipertensión arterial, entre otras, que pueden ser controladas de modo tal que la persona mantiene intacta su inteligencia y su capacidad de autogobernarse libre y responsablemente; por el contrario, existen padecimientos temporales susceptibles de dar lugar a la pérdida de esas aptitudes de la persona, tales como un estado de coma, períodos de intoxicación alcohólica, etcétera. En consecuencia, para que se actualice la hipótesis de la *incapacidad* prevista en la legislación electoral de Oaxaca, para efectos de la sustitución de candidatos, debe atenderse primordialmente al estado de carencia, pérdida o limitación contundente de la capacidad de autogobierno, de obligarse o de manifestar la voluntad por algún medio.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-537/2004.—Jorge Luis Sosa Campos.—29 de octubre de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Ramiro Ignacio López Muñoz.

Sala Superior, tesis S3EL 021/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 943-944.

Como se aprecia, del contenido de la tesis, el término incapacidad, para efectos de la sustitución en el registro de candidatos, debe aplicarse el correspondiente al campo del derecho civil, es decir, la incapacidad legal se actualiza cuando alguna persona se encuentra perturbada en su inteligencia, aunque tenga intervalos lúcidos, o padezca alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación o la alteración en la inteligencia

que esto le provoque, no pueda gobernarse y obligarse por sí misma o manifestar su voluntad por algún medio.

Dicho de otra manera, no todos los casos de enfermedad o afectaciones de carácter físico generan un estado de incapacidad, sino sólo aquellas que puedan tener como consecuencia la falta o limitación del autogobierno individual, libre y responsable, independientemente de su calidad temporal, permanente, total o parcial, ya que —sostiene la sala en su criterio— son hechos notorios, que existan enfermedades crónicas o permanentes como la diabetes o la hipertensión arterial, entre otras, que pueden ser controladas de modo tal que la persona mantiene intacta su inteligencia y su capacidad de autogobernarse libre y responsablemente; por el contrario, existen padecimientos temporales susceptibles de dar lugar a la pérdida de esas aptitudes de la persona, tales como un estado de coma, períodos de intoxicación alcohólica, etcétera.

En consecuencia, para que se actualice la hipótesis de la incapacidad para efectos de la sustitución de candidatos, debe atenderse primordialmente al estado de carencia, pérdida o limitación contundente de la capacidad de autogobierno, de obligarse o de manifestar la voluntad por algún medio.

Establecido el marco normativo anterior, que sirve de base para resolver el presente recurso, tomando en consideración que la materia del mismo, consiste en la negativa del Consejo Estatal Electoral de sustituir por incapacidad al candidato propietario a presidente municipal del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por el Partido Nueva Alianza, este Tribunal analizará en su conjunto los agravios aducidos por el promovente, para efectos de mejor estudio, sin afectar con ello lo argumentado por el partido actor, lo cual no irroga perjuicio alguno, pues lo trascendental es que todos y cada uno de los motivos de agravio sean debidamente examinados por el órgano resolutor. Lo anterior, de conformidad

con la Jurisprudencia número **S3ELJ 04/2000**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005*, página 23, cuyo rubro es **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**.

En virtud de lo expuesto, es procedente determinar, previamente, si en la especie el Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo impugnado con apego a los principios de legalidad y certeza a que hemos hecho alusión en el cuerpo de esta sentencia.

Así, cabe señalar que en toda resolución o acuerdo de autoridad deben expresarse los motivos y fundamentos de derecho en que la misma se basa para resolver la causa de que se trate, en estricta observancia a lo establecido en nuestro sistema de normas electorales vigente. Lo cual encuentra sustento en lo señalado en la jurisprudencia número **S3ELJ 21/2001**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005*, cuyo rubro es: **PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL**.

En ese sentido, al analizar en su integridad el acuerdo impugnado, cabe afirmar que la autoridad responsable constriñe su actuación en cumplimiento y apego a lo expresamente conferido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en términos del artículo 23, fracción III y IV, así como en el código electoral de nuestra entidad, de conformidad con los numerales 106, fracciones I, XXVII y XLI; esto es, el Consejo Estatal Electoral como órgano superior del Instituto Estatal Electoral, encargado de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones en el Estado de Morelos, cuenta, en lo que interesa, con las siguientes atribuciones:

1. Llevar a cabo la preparación de los procesos electorales.
2. Resolver sobre sustitución de candidatos.
3. Dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones del código local de la materia, en el ámbito de su competencia.

Lo anterior, en correspondencia con lo señalado en los diversos numerales 207 y 212 del código comicial local, que en esencia señalan, por una parte, que el registro de candidatos a cargos de munícipes se hará ante el consejo correspondiente, del ocho al quince de abril del año de la elección, teniendo la autoridad administrativa el plazo de ocho días para resolver su procedencia; por la otra, que dentro de los plazos establecidos por el código, los partidos políticos pueden libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrado y concluidos aquéllos, sólo por acuerdo puede hacerse sustitución por causa de muerte, inhabilitación o incapacidad.

Por lo que este órgano jurisdiccional no advierte con ello, que la autoridad administrativa responsable haya incurrido en excesos en sus atribuciones derivado de la inexacta aplicación de las normas citadas, tal y como lo hace valer el partido promovente.

En ese sentido, este órgano resolutor considera que la autoridad administrativa tiene facultades legales para resolver el acto materia de impugnación que nos ocupa, lo cual coincide con lo que la responsable manifiesta en su respectivo informe circunstanciado (a fojas 83 a 88 del sumario), mismo que genera presunción de que el acuerdo impugnado fue emitido de conformidad con las atribuciones que le son propias, encontrándose, además, revestido de legalidad y certeza, por lo que al emitirse tal resolución electoral fueron cumplidos los principios rectores de la materia a los cuales se encuentra

constreñida la actividad del organismo electoral responsable. Lo anterior se sustenta en la tesis relevante número **S3EL 045/98**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005*, página 643, cuyo rubro es **INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN**; en estrecha relación con lo establecido en la diversa tesis relevante número **S3EL044/98** de la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005*, página 641, cuyo rubro es **INFORME CIRCUNSTANCIADO. NO FORMA PARTE DE LA LITIS**.

Ahora bien, por lo que respecta a la afirmación del promovente en el sentido de que la responsable no cuenta con la atribución de emitir dictamen médico, pues al resolver, según su dicho, estimó que las constancias médicas aportadas para acreditar la incapacidad del candidato eran improcedentes e insuficientes, cabe señalar que a juicio de este órgano resolutor el partido actor parte de una falsa premisa, toda vez que el organismo electoral responsable no desestimó el material probatorio aportado por el instituto político en calidad de perito en materia médica, como se quiere hacer ver, sino que lo hizo en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 339 del código electoral local, que a la letra señala: *los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los organismos electorales y el Tribunal Estatal Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia*. Por lo que, de igual forma, resulta evidente que la responsable cumplió en ello con el principio de legalidad al cual se encuentra obligada.

Por otra parte, este Tribunal considera que el acuerdo emitido por la autoridad administrativa responsable se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que es criterio reiterado en diversas ejecutorias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las sentencias o acuerdos deben

verse en su integridad, por lo que, en términos generales, debe existir plena correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, lo cual se cumple si en cualquier parte de la resolución se señalan los motivos y fundamentos legales que sustentan el criterio para resolver. Es aplicable al caso, *mutatis mutandi*, cambiando lo que se tenga que cambiar, la tesis de jurisprudencia número **S3ELJ 05/2002**, visible en las páginas 141 y 142, de la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes*, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares)**.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la autoridad responsable invocó diversos preceptos legales para fundamentar su resolución, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el Código Electoral local, el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, entre otros; además de los razonamientos con los que resolvió improcedente la sustitución del candidato por incapacidad y desestimó las documentales consistentes en las constancias médicas de salud, a efecto de acreditar la sustitución del candidato. Por lo que se considera que el acuerdo de fecha tres de mayo del año en curso, se encuentra debidamente fundado y motivado de conformidad con el sistema de normas aplicables al caso que nos ocupa.

Por otra parte, en cuanto al agravio esgrimido por el partido actor consistente en la inexacta aplicación e interpretación del concepto *incapacidad* —que el mismo refiere como parcial permanente por enfermedad, es decir, hipertensión arterial, como causa generadora de la sustitución del candidato propietario a presidente municipal al Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por el Partido Nueva Alianza— que la responsable realizó al estudiarlo a

la luz de la materia civil y no desde el enfoque laboral, aplicando erróneamente el artículo 6 del Código Familiar para el Estado de Morelos, cuando, en opinión del promovente, debió estarse a lo dispuesto en Ley Federal del Trabajo, este órgano jurisdiccional considera que el instituto político actor parte de una falsa premisa, por lo siguiente.

De la lectura del acuerdo impugnado se arriba a la conclusión de que la autoridad administrativa electoral al analizar la incapacidad manifestada por el ahora promovente, lo hace tomando como orientación el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenida en la tesis relevante número **S3EL 021/2005**, visible en las páginas 943 y 944 de la *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes*, cuyo rubro es **SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL SUPUESTO DE INCAPACIDAD (Legislación de Oaxaca y similares)**, por lo que, en aplicación de este criterio, el organismo electoral responsable orienta el análisis del concepto *incapacidad* al derecho civil, lo que a juicio de este Tribunal en nada afecta al partido promovente toda vez que se actuó dentro del marco de legalidad y certeza, al sustentarse en determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en la materia a nivel federal.

Así, este resolutor considera correcta la actuación de la autoridad responsable al resolver el asunto planteado, toda vez que la misma analizó el concepto de *incapacidad* desde el enfoque de la materia civil y no laboral, es decir, como la incapacidad legal que tiene una persona cuando se encuentra perturbada en su inteligencia, aunque tenga intervalos lúcidos, o padezca alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes.

Por lo que, debe atenderse primordialmente al estado de carencia, pérdida o limitación contundente de la capacidad de autogobierno, de obligarse o de manifestar la voluntad por algún medio; circunstancias que, dicho sea de paso, no acontecen en la persona del candidato del partido actor que se pretende sustituir y que, también, no fueron acreditadas en su momento ante la responsable, es decir, debió demostrarse que dicho candidato no se encontraba apto de ejercer sus derechos y asumir deberes y obligaciones, esto es, para el caso debió evidenciarse que la persona no se encontraba en condiciones de contender en la elección y, posteriormente, ejercer las obligaciones propias del cargo para el cual fue postulado por el partido que hoy se duele.

Lo anterior, tomando en consideración que resulta claro el hecho de que la causa extraordinaria por la que un candidato registrado no pudiera cumplir el cometido para el que fue postulado, es la de no gozar de capacidad legal —entendida como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y para ejercerlos por sí mismo, que abarca a su vez la capacidad de goce y de ejercicio, entendiéndose por la primera, como la aptitud jurídica para ser sujeto de deberes y derechos, y, por la segunda, como la aptitud jurídica de ejercitar o hacer valer derechos, y en consecuencia para asumir por sí mismo deberes jurídicos— lo cual como se ha señalado no fue acreditado por el promovente, puesto que al momento de solicitar la sustitución de su candidato al cargo de presidente municipal de Tetecala, Morelos, el partido ahora recurrente lo hizo en referencia a motivos de salud, lo cual consta en el escrito de fecha treinta de abril del presente año, signado por el representante legal del referido instituto político, dirigido al consejero presidente del organismo electoral responsable en el presente recurso (documento que consta a fojas 53 del expediente en que se actúa), sin que mencione por qué esos motivos de salud imposibilitaron al ciudadano Jorge Luís Pérez Hernández a ejercer la calidad de candidato y, con posterioridad, el cargo al cual fue postulado.

Además, en su escrito inicial de demanda el ahora impugnante, al argumentar la incapacidad de su candidato para encontrarse en condiciones o posibilidades de desempeñar el cargo, afirma:

[...] es importante señalar que la Ley Federal del Trabajo nos refiere que la incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, mas no señala que sea un incapaz o sea que no tenga la capacidad de discernir, en ese orden de ideas la incapacidad a la que se refiere el artículo 6 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos es para aplicarse en personas que presentan problemas para discernir y por lo tanto no pueden manifestar su voluntad y en tratándose del candidato Jorge Luís Pérez Hernández este se encuentra plenamente encuadrado en el caso de una **incapacidad permanente parcial para laborar, según lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 477 inciso II que dice textualmente.** (SIC) **Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, siendo este el caso concreto a estudio** [...]

Como se observa, el promovente manifiesta que el ciudadano Jorge Luís Pérez Hernández es un enfermo que no puede realizar las actividades propias de un candidato a un puesto de elección popular (foja 9 del sumario), “*ya que de hacerlo —según su dicho— estaría en peligro su integridad física*”, sin embargo, no expresa las razones que lo conducen a arribar a tal conclusión, es decir, el por qué estaría en peligro la integridad física del candidato al ejercer el cargo de elección popular.

Ahora bien, por cuanto a la inexacta aplicación del artículo 6 del Código Familiar del Estado, ya referido en párrafos precedentes, este Tribunal advierte que la cita del mismo llevada a cabo por la responsable fue con motivo de definir el concepto *incapacidad*, es decir, como un soporte jurídico (por ende legal) para interpretar gramaticalmente dicho término contenido en el artículo 212 del código de la materia, ya que el legislador local fue omiso en establecer la definición que al caso debió dársele. En ese sentido, es válido sostener que la lógica por la cual la responsable, a efecto de definir el referido concepto, aplicó lo señalado en el Código Familiar para nuestro Estado y no la Ley Federal del Trabajo, consistió en que, de conformidad con el criterio contenido en la tesis **SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL**

SUPUESTO DE INCAPACIDAD (Legislación de Oaxaca y similares), citada en el cuerpo de esta sentencia, el concepto controvertido debe analizarse desde el enfoque del derecho civil y no así laboral; además, en atención al principio general del derecho *lo específico priva sobre lo genérico*, primordialmente se debe atender el sistema jurídico que priva en nuestra entidad.

Cabe señalar, que el recurrente al referir que la autoridad llevó a cabo una inexacta aplicación del código familiar citado, no enderezó argumento alguno con la finalidad de demostrar el por qué a su consideración debería aplicarse al caso lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, puesto que sólo se limita a sostener su idea de aplicar tal normativa por tratarse de una incapacidad laboral mas no legal, lo que, como ha quedado precisado en párrafos anteriores, es una falsa premisa.

En el mismo sentido, el promovente plantea la inexacta aplicación del artículo 41 del Reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular emitido por el Instituto Estatal Electoral, el cual a la letra señala: *“Los Consejos Distritales y Municipales Electorales comunicarán al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento de los plazos para el registro de candidatos, los registros de candidatos que hubiesen recibido”*. No obstante, el partido actor no señala los motivos por los cuales considera que la cita de este artículo le causa perjuicio, sin que esto tampoco se deduzca oficiosamente por este órgano jurisdiccional.

En otro orden de ideas, por lo que se refiere a la afirmación del actor de la inexacta aplicación e interpretación que la autoridad responsable efectúa de la tesis número **S3EL 021/2005**, cuyo rubro es **SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL SUPUESTO DE INCAPACIDAD (Legislación de Oaxaca y similares)**, cabe señalar que los criterios relevantes emitidos por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, deben ser tomados en cuenta por las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales) al resolver la conflictiva que les sea planteada, por lo que resulta procedente estimar como válida la cita y aplicación al caso por parte de la autoridad administrativa responsable, puesto que, a juicio de este Tribunal, la tesis relevante señalada aplica al caso por analogía de razón, esto es, por relación o semejanza entre los conceptos, razones o casos.

En cuanto a la afirmación que en vía de agravio hace valer el promovente en el sentido de que la autoridad responsable omitió estudiar lo referente a que *“el candidato Jorge Luís Pérez Hernández, presento su renuncia con carácter de irrevocable a su candidatura propuesta por lo que en tal virtud la candidatura en comento quedo inexistente para los efectos legales del presente proceso electoral, situación que el Consejo Estatal Electoral omitió en su resolución, dejando las cosas como se encontraban antes de la sustitución”* (fojas 9 y 10 del sumario), cabe señalar que el partido actor nuevamente parte de una falsa premisa, toda vez que el artículo 212 del código local de la materia, únicamente prevé como causas de sustitución extraordinaria, es decir, fuera de los plazos señalados en el ordenamiento de referencia, los casos de muerte, inhabilitación o incapacidad, no así la figura jurídica de la renuncia del candidato, tal y como acontece en otros dispositivos legales, por ejemplo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en el artículo 227, párrafo 1, inciso b), incluye la figura de *renuncia del candidato*, precisando el legislador federal que la misma no procederá cuando se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección.

Además, este órgano jurisdiccional considera que no fue lo suficientemente contundente y preciso el planteamiento del partido político promovente al momento de acudir a solicitar la sustitución de su candidato ante la autoridad administrativa

responsable, ya que si bien es cierto, se dice que dicho candidato renunció, también lo es que en el escrito de fecha veinticuatro de abril del presente año se alegaron motivos de salud ante el Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza. Observándose que, el día treinta del mismo mes y año, al acudir el instituto político a solicitar la sustitución del candidato, el motivo legal y toral que hizo valer fueron cuestiones de salud, presentando unas constancias médicas para probar ese hecho; lo cual en primer término se advierte que, en virtud de los principios de legalidad y certeza, la autoridad administrativa encausó dicha petición a la sustitución por incapacidad del candidato, causa que, como se dijo, se encuentra expresamente establecida en el código electoral local. Afirmar lo contrario, es decir, que se estaba ante una renuncia, hubiese generado un incumplimiento a los principios de legalidad y certeza referidos, por parte de la autoridad administrativa electoral responsable.

No pasa desapercibido que si la renuncia hubiese sido el motivo principal para solicitar la sustitución del candidato, el instituto político hubiese presentado escrito de renuncia del candidato dirigida al órgano administrativo responsable o, en su caso, escrito por el cual el candidato ratificaba en sede administrativa la renuncia formulada ante el partido político, exponiendo en cualquiera de los casos los argumentos contundentes o motivos de fuerza que lo llevaban a renunciar a la contienda, puesto que, como hubiese sido la circunstancia, la misma enfermedad alegada no es motivo de legal para renunciar a la postulación para un cargo de elección popular.

A mayor abundamiento, debe destacarse que el partido actor en su propio escrito de demanda reconoce expresamente que la responsable resolvió la sustitución de registro por incapacidad permanente parcial planteada por él mismo en la controversia a dilucidar, en los siguientes términos “*La resolución que se con este recurso de apelación, es la resolución dictada por el Consejo*

Estatal Electoral de esta entidad federativa, de fecha 3 de mayo del año en curso, la cual resuelve la solicitud de sustitución de registro por incapacidad permanente parcial, presentada por mi Partido Nueva Alianza con respecto al candidato propietario a la Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de Tetecala Morelos, para contender en el presente proceso electoral ordinario local” —el énfasis es nuestro— (fojas 6 del expediente).

Por lo que la autoridad administrativa responsable no se encontraba obligada a estudiar la renuncia, al no ser ésta la causa de sustitución de candidatos en nuestra entidad federativa y al no haber sido planteada como motivo principal al solicitar la sustitución de referencia, máxime que, como se dijo, no presentó tampoco la ratificación del candidato ante la sede administrativa, es decir, al Consejo Estatal Electoral, que sería el encargado de resolver el asunto, por lo que no existe certeza sobre el acto que se aduce en vía de agravio.

Finalmente, en cuanto al agravio del partido actor consistente en la omisión de la autoridad de valorar los medios de prueba aportados conforme el artículo 339 del código comicial local, que ordena que las pruebas aportadas a los organismos electorales deberán ser valorados atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, este órgano jurisdiccional considera que la responsable al valorar las pruebas aportadas por el promovente lo hace en apego a los mismos, tan es así que en el acuerdo impugnado al referirse al material probatorio (fojas 25 y 26 del expediente), se consideró lo siguiente:

[...] constancias médicas que no generan convicción alguna para este cuerpo colegiado para proceder a la aprobación de la sustitución solicitada, toda vez que además de las constancias referidas, **no se aportan otros medios de convicción** que en su conjunto puedan acreditar que el candidato multicitado padezca una incapacidad para ejercer la candidatura por el partido político que lo postula, **toda vez que con las referidas constancias no se demuestra la incapacidad prevista en el artículo 212, del Código de la materia, debido a que los documentos en cuestión, no mencionan las particularidades y alcances de los padecimientos que en ellas se señalan, ya que no indican que el**

paciente sufra una limitación, o alteración en la inteligencia, provocada por el padecimiento y no pueda gobernarse por sí mismo, manifestando su voluntad por algún medio [...]

El énfasis es nuestro.

Como se aprecia, la autoridad responsable valoró el material probatorio, consistente en dos constancias médicas signadas respectivamente por quienes se dicen Dr. Fernando Naranjo Hernández y Dr. Juan José Delgado Donis, lo anterior de conformidad con la lógica (estableció el silogismo por el cual considera que las constancias médicas no son idóneas), la sana crítica (realizó la apreciación del resultado de las pruebas) y la experiencia (actuó de conformidad con los conocimientos adquiridos en la materia), por lo que el partido actor parte de una incorrecta estimación al respecto.

En el caso, obran agregados al expediente en que se actúa, las dos constancias médicas citadas en el párrafo anterior (fojas 17 y 56), una receta (fojas 55) y la opinión de un especialista en la materia aportada con el medio de impugnación que se resuelve (fojas 30 a 51), los cuales al tratarse de documentales privadas, en términos de los artículos 338, fracción I, inciso b), y 339, del código electoral local, son constitutivas de indicios, cuya naturaleza jurídica probatoria corresponde a la de una presunción *juris tantum*, que le otorga valor relativo, salvo prueba en contrario.

En efecto, el valor indiciario de las documentales privadas a que se hace referencia, consiste en que las mismas conducen a este Tribunal a presumir la existencia de una enfermedad.

Sin embargo, al no existir en el expediente otros medios de prueba idóneos que, adminiculados con dichas documentales, en su integridad generen convicción de que el candidato propietario a presidente municipal al Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por el Partido Nueva Alianza, se encuentre incapacitado para ejercer la

candidatura, en los términos expuestos en la presente sentencia, entonces las mismas resultan insuficientes para tener por acreditada la incapacidad por motivos de salud para el desempeño de la candidatura ,y en su caso, el ejercicio del cargo de elección popular para el que es postulado, puesto que únicamente se acredita de manera indiciaria la supuesta enfermedad mas no la incapacidad o imposibilidad para el ejercicio o desempeño de tales calidades (candidato y funcionario público).

Por lo que el partido actor en el presente medio de impugnación no cumplió adecuadamente con la carga probatoria, en los términos del artículo 340, último párrafo, del código comicial local, mismo que contempla el principio de que *quien afirma se encuentra obligado a probar*. Es decir, acreditar con elementos probatorios idóneos y suficientes la causa de sustitución extraordinaria invocada.

Entonces, es correcta la determinación administrativa materia del recurso, toda vez que con las citadas constancias médicas no se demuestra la incapacidad prevista en el artículo 212 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, debido a que de las mismas no se deduce que el paciente se encuentre limitado en sus aptitudes de autogobierno, de libre albedrío, de obligarse o en su caso de manifestar su voluntad por cualquier medio, que constituyeran precisamente los aspectos en los que, de conformidad a lo que se ha explicado con antelación y de acuerdo con el criterio del órgano jurisdiccional federal, deben incidir tales enfermedades o afecciones físicas.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en la *“opinión médica”* referida en párrafos precedentes, suscrita por el Médico Legista Samuel Nava Vázquez, se señala que la enfermedad *“CABE ACOTAR QUE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICO DEGENERATIVA, LO CUAL INDICA*

QUE ES UNA PATOLOGÍA QUE NO SE CURA, Y QUE SOLO SE CONTROLA CON TRATAMIENTO MÉDICO Y CAMBIOS HIGIÉNICO DIETÉTICOS, LO ANTERIOR QUEDA PLENAMENTE SUSTENTADO EN EL CUERPO DE LA PRESENTE OPINIÓN MÉDICA”.

De lo anterior se infiere que la enfermedad aludida por el partido promovente puede ser controlada con tratamiento médico y cambios higiénico dietéticos, lo cual no evidencia que exista incapacidad o imposibilidad del candidato de dicho instituto político para participar en la contienda y, en todo caso, para el ejercicio del encargo, toda vez que de acuerdo al criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se actualice la hipótesis de la incapacidad para efectos de la sustitución de candidatos, debe atenderse primordialmente al estado de carencia, pérdida o limitación contundente de la capacidad de autogobierno, de obligarse o de manifestar la voluntad por algún medio; que en la especie no se acredita.

En ese sentido, los motivos de disenso son ineficaces para obtener la revocación del acuerdo impugnado, por una parte, porque se advierte el cumplimiento por la autoridad administrativa responsable de los principios de legalidad y certeza a los que se encuentra obligada, asimismo porque, como se expuso, la causa de sustitución extraordinaria que hizo valer el partido actor no fue debida ni suficientemente probada.

Por lo que, a consideración de este órgano resolutor, son **INFUNDADOS** los agravios hechos valer por el partido promovente.

En consecuencia, lo procedente es confirmar el sentido del acuerdo materia de impugnación en el recurso que nos ocupa.

Precisado lo anterior, se

RESUELVE:

PRIMERO. Son **INFUNDADOS** los agravios esgrimidos por el promovente, en términos del considerando quinto de esta sentencia.

SEGUNDO. Se **CONFIRMA** el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en los términos precisados en la parte considerativa de fondo de la presente resolución.

Notifíquese personalmente al Partido Nueva Alianza y al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos en el domicilio que al efecto se señala en autos; fíjese en estrados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 328 y 329, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como del numeral 85 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por **UNANIMIDAD** de votos lo resuelven y firman los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, ante la Secretaria General, que autoriza y da fe.

ÓSCAR LEONEL AÑORVE MILLÁN
MAGISTRADO PRESIDENTE

FERNANDO BLUMENKRON
ESCOBAR
MAGISTRADO

HERTINO AVILÉS
ALBAVERA
MAGISTRADO

CARMEN PAULINA TOSCANO VERA
SECRETARIA GENERAL